



Mesa de Entradas Virtual

UsuarioMEV: laurakars



Usuario apto para solicitar autorizaciones de causas

Nombre: Laura

Cámara Contencioso Administrativa

San Martín

[<< Volver](#) [Desconectarse](#)[Volver al expediente](#) [Volver a la búsqueda](#)[Imprimir ^](#)

Datos del Expediente

Carátula: LA ARBOLEDA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA Y GANADERA C/ MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES S/ PRETENSIÓN DECLARATIVA DE CERTEZ**Fecha inicio:** 29/06/2020**Nº de Receptoría:** TL - 4657 - 2019**Nº de Expediente:** TL - 8298 - 2020**Estado:** Fuera del Organismo - En Juz. Origen**Pasos procesales:** Fecha: 31/07/2023 - Trámite: SENTENCIA - (FIRMADO)[Anterior](#)

31/07/2023 11:37:50 - SENTENCIA

[Siguiete](#)

Referencias

Año Registro Electrónico 2023**Cargo del Firmante** AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN**Código de Acceso Registro Electrónico** 4AD73FB4**Fecha de Libramiento:** 31/07/2023 11:47:59**Fecha de Notificación** 01/08/2023 00:00:00**Fecha y Hora Registro** 31/07/2023 11:47:57**Funcionario Firmante** 31/07/2023 11:37:49 - SAULQUIN Jorge Augusto - JUEZ**Funcionario Firmante** 31/07/2023 11:41:48 - BEZZI Ana Maria - JUEZ**Funcionario Firmante** 31/07/2023 11:47:56 - BASAIL Martin - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN**Notificado por** BASAIL MARTIN

Número Registro Electrónico 137

Prefijo Registro Electrónico RS

Registración Pública SI

Registrado por BASAIL MARTIN

Registro Electrónico REGISTRO DE SENTENCIAS

Sentido de la Sentencia: CONFIRMA

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

En la ciudad de General San Martín, en el día de su firma digital, los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín celebran acuerdo ordinario, estableciendo el siguiente orden de votación en virtud del sorteo efectuado: Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la **causa n° TL-8298-2020**, caratulada **“LA ARBOLEDA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA Y GANADERA C/ MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES S/ PRETENSIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA”**.

ANTECEDENTES

I.- Conforme se desprende de las constancias obrantes en el Sistema Informático “Augusta” (en adelante “SIA”), con fecha 8 de septiembre de 2.022 el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen dictó sentencia, mediante la cual resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora contra la Municipalidad de Carlos Casares y declarar que dicha comuna no prestó los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de red vial de los caminos de acceso al establecimiento agropecuario “La Arboleda S.A.” -ubicado en varios inmuebles cuyos datos catastrales han sido debidamente identificados- durante los años 2.016 a 2.018 inclusive, configurándose ilegítimos los importes abonados por tal concepto.

A su vez, rechazó la demanda en relación a las demás pretensiones, esto es, el pedido de declaración de inconstitucionalidad, invalidez y/o ilegalidad de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas Impositivas correspondientes a los años 2.016 a 2.018 inclusive –además de la Ordenanza n° 3.760/16– (y de todas las normas modificatorias futuras), en cuanto establecían para dichos ejercicios la obligación de pago de una tasa como contraprestación de supuestos “servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal”; o, subsidiariamente, la adecuación de la gabela a un límite constitucional que observara la razonable proporcionalidad entre el costo del servicio prestado con la cuantía del tributo.

Finalmente, impuso las costas del litigio en razón de los mutuos vencimientos (cfr. art. 51 del C.C.A.) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

II.- Con fecha 20 de septiembre de 2.022, el letrado apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia y con expresión de fundamentos. Al día siguiente, el magistrado actuante ordenó correr traslado de dicha pieza a la contraria por el término de diez días, quien lo contestó el 12 de octubre de 2.022.

III.- Con fecha 26 de septiembre de 2.022, la mandataria de la comuna accionada dedujo recurso de apelación contra el pronunciamiento definitivo recaído en autos y con expresión de fundamentos. En el día posterior, el Sr. Juez *a quo* dispuso correr traslado de dicha pieza a la contraria, quien lo evacuó el 11 de octubre de 2.022.

IV.- Con fecha 13 de octubre de 2.022, el juzgador de grado ordenó elevar las presentes actuaciones a esta Alzada, lo que fue cumplimentado en la jornada siguiente y en ese mismo día fueron recibidas electrónicamente a través del módulo pertinente. El día 25 de aquel año, tras haberse recibido el expediente en formato físico conforme fuera supeditado con anterioridad, se dispuso –entre otras cuestiones vinculadas a los domicilios procesales de las partes- que pasaran los autos para resolver.

V.- Con fecha 22 de noviembre de 2.022 se efectuó el pertinente examen –formal- de admisibilidad, habiéndose resuelto conceder –con efecto suspensivo- los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada contra la sentencia definitiva dictada en la causa; desestimar el planteo de ofrecimiento de nueva prueba articulado por la demandada y, toda vez que no se había articulado diligencia procesal alguna, llamar los autos para sentencia. Dicha resolución fue notificada electrónicamente a los litigantes conforme se desprende de las constancias insertas como variable en ese trámite y se encuentra firme.

Bajo tales condiciones, y tras haberse efectuado el sorteo legalmente previsto, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, la Señora Jueza Ana María Bezzi dijo:

1º) Cabe precisar que para resolver en el modo señalado en el punto I) de los antecedentes –cuyo contenido doy aquí por reproducido en honor a la brevedad- el Sr. Juez *a quo*, luego de haber reseñado pormenorizadamente los escritos constitutivos de la litis y los diversos movimientos procesales producidos en consecuencia, comenzó por desarrollar los preceptos constitucionales vinculados a la autonomía municipal y a las atribuciones financieras necesarias para atender a los intereses y servicios locales (arts. 5 y 123 de la C.N.; 190 a 197 de la C.P.B.A.). A su vez, reprodujo en lo pertinente histórica jurisprudencia de la Corte Federal sobre el alcance y límites de tales cuestiones.

Seguidamente, destacó que la normativa provincial establecía una enunciación amplia y de carácter no taxativo de los distintos recursos tributarios municipales (arts. 226 a 228 de la L.O.M.), que emanaba de esa autonomía resaltada por nuestra Suprema Corte bonaerense en la doctrina que invocó.

Sostuvo entonces que, dentro de tal marco jurídico, los municipios tenían amplias facultades para imponer distintos tipos de tributos –entre los que se hallaban las tasas-, elegir los objetos imponible, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que se respetaran las limitaciones de origen constitucional y legal que actuaban sobre su potestad tributaria.

1.1) Luego, definió conceptualmente a las tasas y las diferenció de los otros tributos, en cuanto a que el presupuesto de hecho escogido para hacer nacer la obligación tributaria era la exigencia de que existiera una actividad estatal, específica e individualizada que atañera al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria.

Añadió que sus caracteres esenciales eran, entonces, la concreta y efectiva prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente y el destino del tributo, sin tener que repararse en el costo general del servicio ni realizarse una equivalencia estricta y proporcional a los gastos de la oficina que los prestara, pues debían contemplarse los costos directos e indirectos. Invocó doctrina de reconocidos juristas en la materia y precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema en apoyo de tal afirmación.

Señaló que el máximo tribunal de esta provincia sostenía ese principio aunque en algunos supuestos hubiere indicado que la prestación del servicio podía ser potencial, habiendo destacado que en su doctrina legal más reciente (la cual citó) había aclarado que dicha potencialidad estaba vinculada con la negativa y/o resistencia del sujeto pasivo de la obligación fiscal en recibirlo, situación que no debía ser confundida con la ilegitimidad de un obrar municipal que se limitara a organizar el servicio y exigir el pago de la tasa sin llevar adelante, bajo estándares de razonabilidad, la actividad debida.

Concluyó así que esas características hacían al respecto del sistema constitucional y legal de distribución de potestades entre las distintas jurisdicciones que componían el esquema de gobierno en nuestro país.

1.2) A continuación, reseñó el marco normativo del tributo cuestionado –Tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial que cobraba la Municipalidad de Carlos Casares–.

Así, transcribió y desarrolló el artículo 159 de las Ordenanzas Fiscales n° 3.745 para el año 2.016 (promulgada por Dec. n° 80/16), n° 3.821 para el año 2.017 (promulgada por Dec. n° 2.196/16) y n° 3.890 para el año 2.018 (promulgada por Dec. n° 2.746/17); como así también el artículo 22 de las Ordenanzas Impositivas de esos mismos ejercicios.

1.3) Tras ello, recordó que los jueces debían tener en cuenta fundamentalmente aquellos argumentos que presentaran las partes y los elementos de prueba que fueran esenciales y conducentes para el fallo de la causa.

Con ese enfoque, precisó que surgía acreditado en autos que La Arboleda S.A. era sujeto pasivo de la tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial, respecto de los inmuebles 2000487, part. 1048, C: 9; P: 1911; 2000268, part. 12823, C:9, P: 1958 A, 2000284, part. 15479, C: 9, P: 1920D; 2001002, part. 4049, C: 9, P: 1917; 2001004, part. 14.302, C: 9, P: 1959A; 2001005, part. 12.475, C: 9 P: 1929 y 2001007, part. 18626, C: 9, P:1920K. Asimismo, que constaba probado que había efectuado pagos por dicho tributo de períodos puntuales desde el año 2.016 hasta el 2.021, conforme pericia contable practicada en autos (ver escrito electrónico de fecha 02/08/21).

Por otro lado, aclaró que no era objeto de esta acción la legitimidad y/o inconstitucionalidad de los conceptos que se liquidaban en forma conjunta en una misma boleta de deuda (e.g. bomberos voluntarios, fondo de salud pública, fondo municipal de obras, tasa para la lucha contra plagas), pues si bien el actor había impugnado dichos rubros en la instancia administrativa, no los había incluido en el marco de su demanda judicial.

1.4) Luego de haber recordado que –conforme lo disponían las constituciones nacional y bonaerense, y había sido refrendado por la jurisprudencia del más alto tribunal de la Nación- el principio de legalidad en materia tributaria implicaba que el hecho imponible –en el caso de una tasa, la prestación del servicio vinculada al pago del tributo- estuviera definido en la ley que lo estableciera, indicó que en el caso de autos el hecho imponible de la tasa estaba configurado por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejoramiento de la red vial para permitir el debido tránsito en los caminos rurales y el acceso a los establecimientos agropecuarios y permitir el movimiento productivo, cuya principal actividad era agrícola ganadera (ver pericia contable).

Afirmó entonces que las ordenanzas municipales cuestionadas describían la hipótesis de incidencia y la vinculación directa entre el servicio o actividad determinada del Estado con el pago del tributo, resultando el gravamen por conservación de la red vial un recurso tributario municipal con base en la Constitución y normativa provincial.

Por otro lado, advirtió que el legislador municipal había establecido que la tasa se liquidara en proporción sobre la cantidad de hectáreas de los propietarios de los fundos rurales lindantes al camino sobre el cual recayera la prestación del servicio.

En dicha inteligencia, puso de resalto que el legislador –en el marco de su competencia exclusiva en materia tributaria- podía considerar en la selección de la base imponible y categorización de los contribuyentes, no sólo el costo de los servicios que se pusieran a su disposición, sino también su capacidad contributiva, habiéndose entendido que ello resultaba equitativo y aceptable a fin de equilibrar el costo total del servicio público. Añadió que la circunstancia de que la base imponible establecida fuera la superficie de los inmuebles no transformaba a la tasa en un impuesto, desde que ambos tributos se diferenciaban en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para exigirlo.

De tal modo, recalcó que la legitimidad de establecer la base imponible de la tasa en cuestión teniendo en cuenta la superficie de los inmuebles era una cuestión de política fiscal cuya decisión competía a los poderes legislativos de cada municipio, en la medida en que dicha cuantificación respetara los principios, limitaciones y derechos reconocidos constitucionalmente. Invocó doctrina de la Corte federal y del cívico tribunal local que avala dicho criterio.

Desde dicha perspectiva, y ponderando por sobre todo la pericia contable realizada, consideró que en la causa no se había acreditado que el monto recaudado por la tasa fuera afectado a otras erogaciones distintas a los costos directos e indirectos que se generaran en la organización del servicio vinculado, ni que el costo general del servicio fuera desproporcionado en relación a los importes recaudados; ello, independientemente de la eficiencia en la asignación del recurso, cuestión ajena al análisis de la causa.

Expuso que tampoco se había probado que existiera una absorción por parte del Estado municipal de una porción sustancial de la renta o el capital del contribuyente originado en el pago de la tasa, de modo que su importe resultara irrazonable, prohibitivo, destructivo o confiscatorio en la aplicación a su patrimonio y vulnerara así el principio de razonabilidad; al igual que tampoco se constituyera en un monto desproporcionado y disociado de las prestaciones directas e indirectas que debiera afrontar el municipio para la organización del servicio y su puesta a disposición.

Por todo lo expuesto, entendió que correspondía el rechazo de la acción en relación a los puntos desarrollados.

1.5) Seguidamente, indicó que la desnaturalización jurídica del concepto “tasa” podía darse principalmente por dos supuestos: por defecto, ante la inexistencia de la organización y/o prestación del servicio (efectiva o potencialmente); o por exceso, cuando la gabela hubiere de estar destinada a cubrir servicios generales.

Con ese enfoque, explicó que -tal como lo había entendido la Corte Suprema de la Nación en la jurisprudencia que invocó- la demostración de la efectiva prestación del servicio, frente a la negativa del contribuyente en su ejecución, se encontraba a cargo del prestador del servicio debido a que se hallaba en mejores condiciones de acreditarlo.

Tras reiterar conceptos vertidos con anterioridad, apuntó que en el caso de autos surgía acreditado que el municipio tenía organizada una estructura destinada a brindar el servicio de mantenimiento de la red vial, es decir, existían indicadores de la prestación del servicio (cfr. pericia contable ya aludida), pero que ello no legitimaba ‘*per se*’ el cobro del tributo, por cuanto debía acreditarse una efectiva prestación del servicio al contribuyente atendiendo a estándares de razonabilidad, que garantizara la normal circulación por los caminos rurales al sujeto pasivo del tributo, conforme lo había marcado la Suprema Corte bonaerense en un fallo reciente.

En base a ello, precisó que la actora era una empresa que se dedicaba a la explotación agropecuaria, y el servicio a cargo del municipio involucraba a los caminos rurales que conducían a los inmuebles rurales donde la empresa realizaba su actividad.

Refirió que aquella era sujeto pasivo de la tasa de conservación de caminos rurales respecto de los inmuebles correspondientes a las partidas 1048, 12823, 15479, 4049, 14.302, 12.475, 18626; y que había realizado el pago del tributo conforme surgía de la pericia realizada, aunque no se había aclarado importes, ni fecha de pago, ni cuotas en particular.

Señaló que el objetivo del servicio a cargo de la demandada, atento la particularidad del establecimiento agrícola ganadero de la actora, implicaba el mantenimiento del camino rural que permitía el acceso al predio y la debida extracción de los productos que generaba la explotación. Resaltó que sin perjuicio de no haberse acreditado en la causa el tipo de actividad de “producción primaria intensiva” que realizaba la empresa, podía inferirse de publicaciones periodísticas obrantes en la web –las que fueron citadas- que realizaba al menos parcialmente la actividad de tambo, siendo notorio que la extracción de la producción debía hacerse en forma diaria durante todo el año.

A continuación, explicó que –atendiendo al principio de razonabilidad- la periodicidad en la prestación efectiva de los servicios vinculados al cobro de la tasa debía estar relacionada con el estado del camino, es decir, que demandaría mayor o menor mantenimiento dependiendo de varios factores (i.e. transitabilidad, factores climáticos, etc.).

Con esos parámetros, afirmó que en el caso de autos –teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad desarrollada en el establecimiento de la accionante- la prestación del servicio vinculado al pago de la tasa debió haberse realizado durante todo momento en que el camino presentara inconvenientes de transitabilidad, a efectos de garantizar la libre circulación.

Al respecto, reparó en que el perito contador había expuesto que se hallaban indicadores referidos a la existencia de prestación del servicio de mantenimiento de red vial y citado un informe de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas –no acreditado en la causa- referente a trabajos realizados –sin indicación de fecha- en el camino Ordoqui-Hortensia-Herrera Vegas y la construcción de alcantarillados en el tramo Carlos Casares-Ordoqui, con relación al inmueble designado catastralmente como Circ.: 9, parcela 1917r, inmueble que no se había acreditado que perteneciera a la demandada, ni tampoco se había demostrado que dicha obra puntual se vinculara con el camino de acceso a las parcelas de la actora.

Indicó que si bien la accionante no había producido prueba que ratificara lo expuesto en la demanda en cuanto a que el mantenimiento del camino rural había sido realizado por ella y vecinos del lugar, la demandada –teniendo la carga de hacerlo, por estar en mejores condiciones para ello- no había producido prueba que permitiera corroborar la prestación efectiva del servicio sobre el camino rural que permitía el acceso a las parcelas de la actora. En este aspecto, recalcó que incluso cuando el proceso había tramitado bajo las normas del proceso ordinario, el cual contaba con amplitud de medios probatorios, siquiera se habían aportado elementos que permitieran al menos presumir mediante indicios precisos y concordantes la prestación del servicio respecto de los tres períodos fiscales anuales cuestionados en la demanda.

En razón de ello, decidió admitir parcialmente la demanda y declarar la ilegalidad de la percepción de la tasa por no haberse configurado el hecho imponible que habilitaba su cobro, pudiendo la actora de tal manera repetir las sumas indebidamente abonadas por tal concepto.

1.6) Por último, a cualquier evento y en el marco de la acción iniciada –declarativa de certeza sobre la inconstitucionalidad de las ordenanzas cuestionadas-, aclaró que no debía confundirse la validez constitucional de las ordenanzas –situación que ya había analizado anteriormente-, es decir la adecuación de la norma a los preceptos y principios constitucionales, con la ilegalidad y por ende inconstitucionalidad de la pretensión fiscal y de los pagos efectuados por un tributo por el cual no se hubiere configurado el hecho imponible previsto en la hipótesis de incidencia contemplada en la norma; ello, pues la falta de concreción del hecho imponible tornaba ilegítimo el pago realizado por carecer de debida causa, lo cual no implicaba que la norma en su aspecto genérico deviniera inconstitucional, por cuanto si el fisco hubiese prestado el servicio vinculado al cobro del tributo no habría de existir reproche legal y/o constitucional alguno.

2º) Relatados los antecedentes del caso y expuestos los fundamentos del decisorio de grado, corresponde analizar los recursos de apelación interpuestos contra él por ambas partes.

A) Apelación de la parte actora:

Del referido escrito surge que dicha litigante, por intermedio de su letrado apoderado, se agravia –en lo sustancial- por lo siguiente:

i) En primer lugar, acusa que la sentencia atacada cae en una contradicción –a su entender, grave e insalvable- de sostener, por un lado, que se ha probado que la accionada ha omitido prestar el servicio que constituye el objeto del tributo (tasa) que compulsivamente ha cobrado y, por el otro, no le ha asignado a ello ninguna consecuencia respecto del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos constitucionales en materia tributaria a ser observados, principalmente aquellos que emanan del principio de legalidad tributaria, equidad, razonabilidad e igualdad constitucionalmente consagrados.

De tal modo, y no obstante reconocer que se ha otorgado tratamiento a casi todos los argumentos vertidos en la demanda, aduce que el pronunciamiento no da respuesta adecuada y no logra explicar ni justificar cómo puede ser posible que la tasa en cuestión, cuyo servicio insiste no ha sido prestado, no violente los principios en la materia apuntados, cuando reitera que el tributo resulta –desde su punto de vista- inconstitucional en sí mismo y confiscatorio al no contemplar una relación de proporcionalidad entre costos y servicio y precio de la tasa, y al establecer el pago de distintos precios entre iguales contribuyentes que reciben el mismo –presunto, según alega- servicio público, en virtud de la cantidad de hectáreas que posean, todo lo cual terminaría desvirtuándola y convirtiéndola en un verdadero impuesto cuya recaudación se encuentra prohibida para los gobiernos municipales.

Sostiene que en el caso la desproporción entre costo del servicio y precio del mismo no es opinable ni irrazonable ni cuestionable, sino absoluta a la luz de la importantísima recaudación anual de dinero con origen en el cobro de la gabela y la omisión de la prestación del servicio que asevera ocurre y darían cuenta las probanzas de autos.

Así, esgrime que el decisorio debería haberle asignado a todo ello la consecuencia correspondiente, que no sería otra que la invalidez constitucional postulada, pero contrariamente ha justificado el sostenimiento del sistema fiscal habiendo hecho hincapié en que el mismo presentaba particular importancia para la integración del erario público, con el cual se solventan los gastos que genera la actividad estatal encaminada hacia el logro del bien común.

Por ello, solicita que se revoque la sentencia atacada y se admita íntegramente la demanda entablada.

ii) En segundo lugar, critica que se haya decidido imponerle las costas por el rechazo parcial de la demanda en lo atinente a las cuestiones previamente desarrolladas.

Expresa que ello resulta infundado e injusto, ya que estima que existen sobradas y fundadas razones para que esa pretensión prospere o, en su defecto, para considerar que su parte se encontraba con derecho a plantearla.

Atento tales circunstancias, peticiona que para el improbable supuesto en que se confirme la sentencia de grado en cuanto al fondo, se impongan las costas del proceso en el orden causado respecto del rechazo parcial de la demanda.

iii) En tercer y último lugar, aduce que el sentenciante de grado no ha resuelto la expresa pretensión articulada tanto en instancia administrativa como en la demanda de autos, relativa a la expresa impugnación efectuada con base constitucional y legal con relación a que con el pago recaudado por la tasa aquí cuestionada se estarían financiando –según alega- servicios generales del municipio (bomberos voluntarios, fondo de salud municipal, fondo municipal de obras, tasa para la lucha contra las plagas y fondo cultura deporte y ayuda para las personas discapacitadas –siendo este último ya percibido a su vez dentro de la tasa de seguridad e higiene, conforme manifiesta-) u otros servicios divisibles que no ha usado el contribuyente y que, por razón de su destino –y no del excesivo monto-, se trata de un impuesto y no de una tasa.

Afirma, entonces, que la actora abona de modo compulsivo otras erogaciones ajenas al servicio de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal que no poseen relación con el tributo ni con el presunto servicio que el mismo se dirigiría a pagar, pero que su pago es exigido compulsivamente junto con el de la tasa de autos resultando de toda claridad que ello colisiona y transgrede, en forma flagrante, normas de raigambre federal y otras de carácter provincial.

Por todo lo expuesto, requiere se haga lugar al recurso de apelación articulado con los alcances indicados y expresa imposición de costas a la contraria. Asimismo, hace reserva del caso federal oportunamente planteado.

B) Apelación de la parte demandada:

Del referido escrito se desprende que dicha litigante, a través de su mandataria, se agravia –en lo sustancial- por entender que el sentenciante de la instancia anterior ha hecho lugar parcialmente a la pretensión de la actora y declarado la ilegalidad de la percepción de la tasa por no haberse prestado los servicios correspondientes al mantenimiento vial de los caminos de acceso al establecimiento agropecuario de la accionante en los períodos fiscales 2.016 a 2.018 inclusive, sin haber considerado -ni siquiera parcialmente- los argumentos esgrimidos por su parte durante el proceso ni las pruebas obrantes en autos.

En dicha tesitura, expresa que el Sr. Juez *a quo* ha invertido la carga de la prueba con justificación en que la Administración se encuentra en mejores condiciones, cuando la teoría indica que quien alega un hecho debe probarlo. Recalca, así, que si es la actora quien alega que el servicio no le es prestado, al ser quien efectúa el reclamo y la interesada en un resultado favorable, debería al menos presentar los elementos necesarios que demuestren sus dichos.

Sobre el punto, asegura que no existen pruebas en el proceso que determinen su veracidad sino, por el contrario, surge –desde su óptica- acreditado con el informe pericial contable realizado que el municipio tiene organizada una estructura y maquinaria destinada a brindar el servicio de mantenimiento de la red vial, no pudiendo entender en qué se ha basado el magistrado para dar por sentada la intransitabilidad de los caminos y además exigirle a su parte la prueba de las situaciones alegadas por la contraria.

A su vez, aclara que los municipios solo prestan, respecto de los caminos rurales, el servicio de mantenimiento, reparación y conservación, pero no la reconstrucción o construcción de un nuevo camino, ya que estos tipos de trabajos exceden a los presupuestos municipales y deben ser afrontados por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de lo previamente señalado, afirma que la Corte federal ha sostenido invariablemente que no es necesario que el obligado haga uso efectivo del servicio, que la tasa –basada en un servicio- no es una relación obligacional privada que requiera el cumplimiento de una prestación para exigir su pago y, por ello, una vez que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general. Añade que, más recientemente y en un fallo que cita, la Suprema Corte bonaerense ha entendido que lo importante, como fundamento del gravamen, es la existencia de una organización administrativa que esté en condiciones de prestar el servicio que da origen a la imposición de la tasa, con independencia de que efectivamente se haya prestado en el caso concreto.

Finalmente, tras resaltar que las tasas municipales constituyen un capítulo central entre los recursos tributarios para el cumplimiento de los cometidos de dicha organización estatal, solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque el pronunciamiento atacado en lo que ha sido materia de agravio. Asimismo, formula expresa reserva del caso federal para el supuesto de obtener una decisión adversa a la pretendida.

3º) En la contestación pertinente, el letrado apoderado de la parte actora –en lo que aquí interesa- aduce que el recurso de apelación interpuesto por la accionada resulta inadmisibile por infundado; en subsidio, replica los cuestionamientos formulados por dicha litigante y solicita su total rechazo, con expresa imposición de costas a dicha parte.

Por su lado, la mandataria del municipio demandado también plantea la deserción de la pieza recursiva interpuesta por su contraparte; subsidiariamente, refuta los argumentos críticos desplegados por ésta y peticiona que sean desestimados, con expresa imposición de costas a la contraria.

4º) Definidas las premisas a tenerse en cuenta en el abordaje de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la demandada, a través de los cuales pretenden poner en crisis el pronunciamiento del sentenciante de primera instancia en el que se ha resuelto hacer lugar parcialmente a la demanda promovida en autos e imponer las costas de acuerdo a los mutuos vencimientos, adelanto que tales piezas no pueden prosperar en relación a la decisión fondal debido a que adolecen de insuficiencia técnica.

A fin de sustentar esa conclusión anticipada, he de señalar que observo –por un lado- que el magistrado de grado ha considerado todo lo ventilado por la actora La Arboleda S.A. en el escrito inicial (ver fs. 134/156 vta.) y las manifestaciones vertidas en esa instancia por la accionada en contraposición (ver escritos electrónicos de fecha 01/06/20 presentados por el D.E. y el H.C.D., obrantes en el “SIA”), las constancias probatorias reunidas en autos (ver documentación de fs. 9/132; pericia contable y la contestación al pedido de explicaciones requerido por la parte actora, conforme escritos electrónicos de fecha 02/08/21 y 24/11/21, obrantes en el “SIA”) y la normativa y jurisprudencia aplicables al supuesto bajo análisis, para dar un adecuado encuadre a la demanda perseguida y desplegar un acabado razonamiento que sustentara su decisión de hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora contra la Municipalidad de Carlos Casares y declarar que dicha comuna no prestó los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de la red vial de los caminos de acceso al establecimiento agropecuario “La Arboleda S.A.” -ubicado en varios inmuebles cuyos datos catastrales han sido denunciados en autos- durante los años 2.016 a 2.018 inclusive, configurándose ilegítimos los importes abonados por tal concepto; a la vez que ha dispuesto el rechazo de la acción en relación a las demás pretensiones, esto es, el pedido de declaración de inconstitucionalidad, invalidez y/o ilegalidad de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas Impositivas correspondientes a los años 2.016 a 2.018 inclusive – además de la Ordenanza n° 3.760/16– (y de todas las normas modificatorias futuras), en cuanto establecían para dichos ejercicios la obligación de pago de una tasa como contraprestación de supuestos “servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal”; o, subsidiariamente, la adecuación de la gabela a un límite constitucional que observara la razonable proporcionalidad entre el costo del servicio prestado con la cuantía del tributo.

4.1) Reparando primeramente en la pieza recursiva articulada por la parte actora, advierto con claridad que en ella el quejoso no ha rebatido los fundamentos sustanciales de la sentencia en lo que respecta al rechazo parcial de la demanda decidido por el Sr. Juez *a quo* -quien: **a)** *ha desarrollado acabadamente el sustento constitucional y legal de las tasas municipales en general y los de la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial contemplada en la normativa de la comuna accionada; b)* *ha puesto de resalto los caracteres esenciales que hacen a su exigibilidad; c)* *ha ponderado la doctrina emanada de la Corte federal y la doctrina legal de la Suprema Corte provincial establecida en la materia, en cuanto aquella requiere la prestación efectiva del servicio y la local ha considerado que puede ser potencial, pero aclarando que ello está vinculado con la negativa y/o resistencia del sujeto pasivo de la obligación fiscal en recibirlo y no debe ser confundido con la ilegitimidad de un obrar municipal que se limite a organizar el servicio y exigir el pago de la tasa sin llevar adelante -bajo estándares de razonabilidad- la actividad debida; d)* *ha recalcado que esa misma doctrina determina que no cuadra requerir una equivalencia estricta y proporcional a los gastos de la oficina que preste los servicios en cuestión, en tanto deben contemplarse los costos directos e indirectos; e)* *ha dicho que tal doctrina ha avalado que en la selección de la base imponible y*

categorización de los contribuyentes se considere no sólo el costo de los servicios, sino también –por razones de equidad- su capacidad contributiva; f) ha agregado respecto de esto último que la legitimidad de establecer la base imponible de la tasa en cuestión teniendo en cuenta la superficie de los inmuebles de los contribuyentes no convierte a la tasa objetada en un impuesto y que esa facultad es una cuestión de política fiscal cuya decisión compete a los poderes legislativos de cada municipio, en la medida en que dicha cuantificación respete los principios, limitaciones y derechos reconocidos constitucionalmente y no derive en resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones que deba afrontar el municipio para organizar y poner a disposición el servicio; g) ha afirmado al respecto, principalmente a partir de la pericia contable llevada a cabo en autos, que en la causa no se ha acreditado que el monto recaudado por la tasa haya sido afectado –en los períodos implicados- a otras erogaciones distintas a los costos directos e indirectos que se generaban en la organización del servicio vinculado, ni que el costo general del servicio hubiere sido desproporcionado en relación a los importes recaudados; h) ha expresado que tampoco se ha probado que hubiera existido una absorción por parte del Estado municipal de una porción sustancial de la renta o el capital del contribuyente originado en el pago de la tasa, de modo que su importe hubiere resultado irrazonable, prohibitivo, destructivo o confiscatorio en la aplicación a su patrimonio y hubiere vulnerado el principio de razonabilidad, ni tampoco que se hubiere constituido en un monto desproporcionado y disociado de las prestaciones directas e indirectas que haya debido afrontar el municipio para la organización del servicio y su puesta a disposición-; e i) ha explicado que no debe confundirse la validez constitucional de las ordenanzas, es decir la adecuación de la norma a los preceptos y principios constitucionales, con la ilegalidad y por ende inconstitucionalidad de la pretensión fiscal y de los pagos efectuados por un tributo por el cual no se hubiere configurado el hecho imponible previsto en la hipótesis de incidencia contemplada en la norma-; por lo que sus reproches se aprecian más como una mera disconformidad que una crítica concreta y razonada del error o errores en que afirma habría incurrido el sentenciante de primera instancia con respecto a los puntos controvertidos, habiendo incumplido de tal manera con la carga procesal que le cabía en esta instancia de apelación (cfr. art. 56 inc. 3° del C.C.A.).

Basta el simple confronte de la pieza recursiva en examen con el escrito de demanda (ver fs. 134/156 vta.) para corroborar que el apelante, lejos de sustentar las omisiones y/o contradicciones que acusa, se ha limitado a reeditar -en lo sustancial- los argumentos expuestos en la instancia de grado en torno a la cuestión de fondo debatida y a iterarlos persistentemente a lo largo de su expresión de agravios, sin hacerse cargo de indicar cuáles serían las falencias en las que habría incurrido el magistrado de grado y -mucho menos- de sustentar el por qué revestirían tal cualidad a efectos de procurar revertir el resultado parcialmente adverso obtenido en aquella instancia. Así, la mera defensa de su postura en relación al asunto controversial no hace más que provocar que su ataque quede estancado en el terreno de la discrepancia subjetiva con lo decidido.

He de rememorar que, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina en la materia, la expresión de agravios, que persigue el control de justicia de la sentencia por el Tribunal de Alzada, debe autoabastecerse en el sentido de señalar al Tribunal *ad quem* los errores puntuales y concretos que se imputan a la sentencia recurrida, debiendo tal fundamentación exponerse de manera clara, precisa y concluyente (cfr. CSJN, 22/11/72, Juris. Arg. 1973, VV. 17, pág. 368; cfr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Ordinarios”, pág. 455), no bastando con reiterar argumentos ya expuestos en la demanda o su contestación, y que fueran desestimados por el magistrado de la instancia anterior, como tampoco en la formulación de afirmaciones genéricas (cfr. CNCiv., Sala C, 8/8/74, LL, v. 156, pág. 615). Asimismo, **al ser el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ésta no se encuentra facultada institucionalmente para suplir los déficits argumentales del recurrente, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo** (arg. CC0100 SN, causa n° 4.194, “Pereyra”, sent. del 04/06/02; y esta Cámara *in re*: causas n° 6.586/17, “Martignoni”, res. del 20/03/18 y n° 6.615/17, “Andrade Andrade”, sent. del 16/04/18); pues se ha dicho que “...Si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso...” (cfr. SCBA LP, causa L 117.721, “Agapito”, sent. del 25/11/15; y esta Alzada, en las causas n° 6.586/17, “Martignoni”, y n° 6.615/17, “Andrade Andrade”, ya mencionadas).

Ello así, por cuanto el tribunal de apelación no tiene una función de contralor o revisora, sino que limita su actuación a las alegaciones realizadas por el apelante en el memorial o expresión de agravios. La apelación comienza con dicha pieza, que hace las veces de una demanda. Así, **siendo los agravios los que dan la medida de las atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso cuando los mismos sean suficientemente explicitados e intenten demostrar los yerros de la sentencia o auto cuestionado. Si no se cumple con tal crítica concreta y razonada, el recurso debe declararse desierto** (cfr. CC0102 MP, causa n° 122.680, “Conti”, sent. del 17/08/10; y esta Alzada *in re*: causas n° 4.665/15, “Fisco...c/ Materiales Franco S.A.”, res. del 25/06/15; n° 4.820/15, “Industrial and Commercial Bank of China...”, res. del 23/11/15 y n° 5.454/16, “Inelta S.R.L.”, res. del 02/05/18, entre muchas otras).

A partir de lo dicho, insisto, las manifestaciones realizadas por la parte actora en la pieza recursiva en examen con relación a la cuestión fonal, adolecen de las falencias apuntadas en el párrafo precedente y resultan, por lo tanto, inhábiles para conmovir la validez del fallo atacado.

4.2) En lo que respecta al recurso de apelación deducido por la comuna demandada contra la admisión parcial de la demanda incoada en autos y la consecuente declaración de que no ha prestado los servicios correspondientes a la tasa de mantenimiento de la red vial de los caminos de acceso al establecimiento agropecuario “La Arboleda S.A.” -ubicado en varios inmuebles cuyos datos catastrales han sido denunciados en autos- durante los años 2.016 a 2.018 inclusive, configurándose por ende ilegítimos los importes abonados por tal concepto, encuentro que el escrito adolece de similares falencias.

Así lo considero, pues la recurrente ha postulado que el sentenciante de primera instancia no ha tenido en cuenta sus argumentos defensivos volcados oportunamente en los escritos de responde de demanda (ver escritos electrónicos de fecha 01/06/20 presentados por el D.E. y el H.C.D., obrantes en el “SIA”), cuando –lejos de ello- éste los ha tratado pormenorizadamente señalando: **a) que la desnaturalización jurídica del concepto “tasa” puede darse ante la inexistencia de la organización y/o prestación del servicio, o cuando la gabela esté destinada a cubrir servicios generales; b) que frente a la alegación del contribuyente sobre la inexistencia del servicio, recae sobre la comuna prestadora la obligación de acreditar su efectiva prestación, sobre todo cuando se encuentra en mejores condiciones de hacerlo tal como lo ha establecido la reciente doctrina legal del cimero tribunal provincial que ha invocado (ver especialmente causa B. 63.745, “Automóvil Club Argentino”, sent. del 29/12/20); c) que si bien se ha acreditado que el municipio tenía organizada una estructura y maquinaria destinada a brindar el servicio de mantenimiento de la red vial, ello no legitimaba ‘per se’ el cobro del tributo y debía demostrarse una efectiva prestación del servicio al contribuyente que atendiera a estándares de razonabilidad y garantizara la normal circulación por los caminos rurales al sujeto pasivo del tributo, conforme la doctrina legal previamente citada, en virtud de lo cual ha entendido que la prestación del servicio vinculado al pago de la tasa debió haberse realizado durante todo momento en que el camino presentara inconvenientes de transitabilidad con motivo de la incidencia de diversos factores, a efectos de garantizar la libre circulación; y d) que de la prueba recabada en autos, especialmente la pericial contable, surge que en los tres períodos fiscales anuales -2.016 a 2.018 inclusive- la comuna accionada, quien tenía la carga de la acreditación de los eventos aun cuando la contraria no hubiere producido prueba que ratificara lo expuesto en la demanda en cuanto a que el mantenimiento del camino rural había sido llevado a cabo por ella y vecinos, sólo ha probado haber realizado trabajos –sin indicación de fecha- en el camino Ordoqui-Hortensia-Herrera Vegas y la construcción de alcantarillados en el tramo Carlos Casares-Ordoqui, con relación al inmueble designado catastralmente como Circ.: 9, parcela 1917r, el cual que no se ha acreditado que pertenezca a la demandada, ni tampoco se ha demostrado que dicha obra puntual se vincule con el camino de acceso a las parcelas de la actora.**

De tal manera, de un lado, no observo las contradicciones en el razonamiento del juzgador de grado que se denuncian sino –antes bien- que la apelante se ha desentendido del iter lógico seguido; mientras que, del otro, aprecio que el cuestionamiento acerca de la valoración de la prueba que ha llevado a cabo el magistrado a quo constituyen –a mi juicio- vagos argumentos que carecen de entidad suficiente para enervar la legitimidad de la

sentencia puesta en crisis, desde que no indican concretamente qué elemento habría sido omitido o ponderado de manera equivocada y tendría aptitud para modificar sustancialmente el resultado del pleito.

Dando aquí por reproducidos los fundamentos anteriormente vertidos en cuanto a la exigencia de una crítica razonada a los fundamentos jurídicos del fallo para abrir el examen en la segunda instancia –lo cual, insisto, no ha sido cumplido-, encuentro pertinente adicionar en el particular que la Suprema Corte bonaerense tiene dicho que la discrepancia del apelante con la valoración de la prueba no es base idónea de agravio (cfr. SCBA LP, Ac. 59.368, “Acuña”, sent. del 31/10/95 y Rc. 113.281, “Benítez de Suarez”, res. del 09/12/10, entre otras; y esta Cámara *in re*: causa n° 8.379/20, “Geraghty”, sent. del 26/10/20, por mencionar alguna); y que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas -como acontece en autos, en donde en el escrito recursivo examinado se discurre sobre la propia valoración de la apelante respecto de la prueba producida-, **sin asumir el juicio crítico de los razonamientos realizados por el sentenciante, demostrando cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental** (cfr. SCBA LP, causas C. 107.363, “Irazusta y Compañía S.C.A.”, sent. del 30/06/10; C. 108.313, “Bianco”, sent. del 11/07/12; C. 109.044, “C., A. V.”, sent. del 02/07/14 y C. 118.307, “Turismo Flecha S.R.L.”, sent. del 23/05/17, entre muchas otras; y esta Alzada *in re*: causas n° 7.538/19, “Olmedo”, sent. del 23/09/19 y n° 8.379/20, “Geraghty”, antes mencionada, entre otras).

Ello así, pues cabe recordar que el juez goza de la facultad de seleccionar aquellos elementos de apreciación objetiva que se incorporan al expediente que estime relevantes para formar convicción y decidir el tema sometido a su conocimiento, motivo por el cual la circunstancia de atribuirle eficacia probatoria a alguno de ellos, desatendiendo a otros, no puede constituir agravio audible si no se demuestra la sinrazón de haber procedido de tal modo, sea por la falta de mérito de tal material probatorio, cuanto por su contradicción con otros medios más eficaces o relevantes, o por cualquier otra razón que persuada que medió de parte del sentenciante una incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica (cfr. CC0203 LP, causas n° 116.514, “Zago”, sent. del 25/02/14 y n° 118.766, “Sorocki”, sent. del 24/09/15; y esta Cámara *in re*: causas n° 7.538/19, “Olmedo” y n° 8.379/20, “Geraghty”, ya citadas, por referir algunas).

5º) En definitiva, esta Alzada tiene dicho que la crítica debe ser concreta, lo que supone que la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, incumbe luego a la parte interesada la tarea de demostrar cuál es el punto del desarrollo argumental en que se ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica –dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en la sentencia. Cuando el litigante sólo manifiesta su disconformidad o discrepancia subjetiva con lo decidido, sin demostrar cuales han sido los errores incurridos en la decisión, queda invalidado por falta de instrumental lógico de crítica antes que por la solidez de la decisión que impugna (cfr. causas n° 456/06, “Delgado”, sent. del 14/02/06; n° 927/07, “Fisco... c/ Spinelli...”, sent. del 22/06/07; n° 2.829/11, “De Amorrortu”, sent. del 06/12/11; n° 2.707/11, “Club de Veleros Barlovento Asoc. Civil”, sent. del 02/03/12; n° 4.665/15, “Fisco...c/ Materiales Franco S.A...”, n° 4.820/15, “Industrial and Commercial Bank of China...” y n° 5.454/16, “Inelta S.R.L.”, anteriormente referidas, entre otras tantas).

En razón de todo lo previamente expuesto, y tal como lo he anticipado, forzoso es concluir entonces en que la parcela del recurso de apelación articulado por la parte actora vinculada al rechazo parcial de la acción deducida se encuentra desierta por falta de fundamentación suficiente en los términos del artículo 56 inciso 3º del C.C.A. y así debe ser declarada, como así también debe ser decidido en relación a la totalidad del recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado, dado que no cumplen con los requisitos básicos de exponer los fundamentos críticos contra los supuestos errores cometidos por el magistrado de grado en la sentencia recaída y, mucho menos, con demostrar la ocurrencia de los mismos que impone el carácter razonado que debe reunir toda expresión de agravios (cfr. arts. 56 inc. 3º y 77 inc. 1º del C.C.A.; y 260 del C.P.C.C.; CC0201 LP,

causa n° 92.915, “Banco Platense S.A.”, sent. del 14/06/07; y Azpelicueta, Juan J. - Tessone, Alberto, “La Alzada, Poderes y Deberes”, pág. 25). Así lo considero, pues lo ordenado por las normas procesales citadas obligan no solo a las partes sino también a los jueces de la causa (cfr. SCBA LP, Ac. 44.018, “Estevez Garrido”, sent. del 13/08/91; Ac. 54.246, “Andrea”, sent. del 12/08/97 y Ac. 77.770, “D’Avola”, sent. del 19/02/02).

6°) En otro orden y con relación a la acusación formulada por la accionante y referida a que el sentenciante de grado no ha resuelto la expresa pretensión articulada tanto en instancia administrativa como en la demanda de autos, vinculada a la expresa impugnación efectuada con base constitucional y legal con relación a que con el pago recaudado por la tasa aquí cuestionada se estarían financiando –según alega- servicios generales del municipio (bomberos voluntarios, fondo de salud municipal, fondo municipal de obras, tasa para la lucha contra las plagas y fondo cultura deporte y ayuda para las personas discapacitadas –siendo este último ya percibido a su vez dentro de la tasa de seguridad e higiene, conforme manifiesta-) u otros servicios divisibles que no ha usado el contribuyente y que, por razón de su destino –y no del excesivo monto-, se trata de un impuesto y no de una tasa, debo decir que tal aseveración carece de todo sustento.

Cabe reiterar que el Sr. Juez *a quo*, lejos de haber pasado por alto el tema, se encargó de dejar aclarado que si bien la parte actora había impugnado en la sede administrativa los conceptos que se liquidaban en forma conjunta en una misma boleta de deuda (e.g. bomberos voluntarios, fondo de salud pública, fondo municipal de obras, tasa para la lucha contra plagas), no los había incluido en el marco de su demanda judicial y, por lo tanto, no resultaban objeto de esta acción la ilegitimidad y/o inconstitucionalidad.

Ante tal situación, y tras haber leído minuciosamente el escrito de demanda presentado oportunamente (ver fs. 134/156 vta.), encuentro que le asiste razón al juzgador de primera instancia sobre el asunto, pues la accionante no ha introducido expresamente tal planteo dentro del objeto de su pretensión y ello impedía su abordaje de manera oficiosa.

He de recordar que el principio de congruencia importa que -como regla general- debe existir correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (cfr. SCBA LP, C 111.236, “Barreto”, sent. del 09/10/13 y C 113.463, “Sánchez”, sent. dictada en la misma fecha, entre otras; y esta Alzada *in re*: causas n° 3.532/13, “Albanese”, sent. del 06/02/18 y n° 7.977/20, “Santacruz”, sent. del 30/09/20, por mencionar algunas).

De conformidad con lo expuesto, **el órgano jurisdiccional debe ceñirse a los límites que le presentan los titulares de la acción o de la excepción, no pudiendo el juzgador extenderse más allá para conocer o modificar la traba de la relación jurídico procesal**, por cuanto en el proceso dispositivo el magistrado –por regla- no puede suplir deficiencias de los que ponen en marcha la pretensión (arg. CC0103 LP, “Federación Patronal Cooperativa de Seguros”, sent. del 24/10/02). Y corresponde precisar, en tal aspecto, que **la exactitud y claridad en la descripción del objeto demandado que reclama el artículo 27 del C.C.A. no puede ser suplida por aclaraciones posteriores, ni tampoco cabe entender que esa petición luego explicitada, haya estado comprendida en la pretensión inicial**, ya que no son admisibles como regla general las peticiones implícitas o genéricas (arg. CC0002 MO, 32.142, “Ramos”, sent. del 01/08/94; y esta Alzada, en las causas n° 6.954/18, “Ponce”, sent. del 11/09/18; n° 6.916/18, “Cooperativa de Trabajo Rocío Ltda.”, sent. del 10/04/19 y n° 7.977/20, “Santacruz”, antes citada, entre muchas otras).

En atención a lo desarrollado, el cuestionamiento analizado en esta parcela debe ser desestimado.

7°) Resta entonces que me expida con respecto al agravio dirigido por la parte actora contra el modo en que han sido establecidas las costas del proceso en la instancia de grado.

Como hemos visto, el Sr. Juez *a quo* ha decidido imponerlas “*en razón de los mutuos vencimientos –art. 51 CCA-*” (sic) y el accionante ha objetado tal temperamento por encontrarlo infundado e injusto –al entender que existen sobradas y fundadas razones para que la pretensión prospere o para considerarse que su parte se encontraba con derecho a plantearla- y ha requerido, para el improbable supuesto en que se confirme la sentencia de grado en cuanto al fondo, que se fijen en el orden causado respecto del rechazo parcial de la demanda.

Cabe recordar que el artículo 51 del C.C.A., al igual que el artículo 68 del C.P.C.C., contempla en su inciso 1° –y en su texto vigente (según Ley n° 14.437)- como criterio rector el principio objetivo de la derrota, dejando a salvo la facultad excepcional del juez de eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido.

Entiendo que esto último es lo que ha ocurrido en el caso, teniendo en cuenta que la demanda ha prosperado únicamente en parte, al haberse desestimado el planteo de inconstitucionalidad formulado y el pedido de que se adecuara a una razonable proporción el costo del servicio prestado con la cuantía del tributo exigido, no obstante haberse declarado la ilegitimidad de los importes abonados por la tasa de mantenimiento de la red vial de los caminos de acceso al establecimiento agropecuario “La Arboleda S.A.” y por diversos años debido a la falta de prestación del servicio en cuestión.

Asimismo, al no haber el Sr. Juez de grado indicado porcentaje alguno a cargo de cada uno de los litigantes, debe entenderse que las costas han quedado distribuidas por su orden.

Frente a ello, por un lado, el cuestionamiento formulado en cuanto al traslado íntegro de los gastos causídicos a su contraparte no puede prosperar, dado que su recurso no ha tenido éxito en lo sustancial. Y por el otro, teniendo en consideración cómo han sido establecidas en el fallo atacado, la crítica subsidiariamente formulada por el quejoso para que se distribuyan las costas en el orden causado deviene inatendible, por cuanto corresponde recordar que todo justiciable que interpone un recurso tiene interés en que la decisión judicial sea modificada o dejada sin efecto, y ese interés presupone la existencia de un gravamen.

Hay gravamen –como requisito subjetivo de admisibilidad del recurso- **cuando media una diferencia perjudicial para la parte, entre lo pedido por ella y lo concedido por la resolución apelada** (cfr. Schönke, “Derecho Procesal Civil”, Bosch, Barcelona, pág. 301, citado en Azpelicueta, J.J. – Tessone, A., “La Alzada. Poderes y deberes”, Lib. Editora Platense, Buenos Aires, 1993, págs. 10 vta./11; y este Tribunal, en las causas n° 4.616/15, “Trapp”, res. del 01/08/17; n° 6.642/18, “Ochoteco”, res. del 11/01/18; n° 4.428/14, “Rodríguez”, sent. del 07/02/19 y n° 8.719/20, “Fisco... c/ Nordelta S.A....”, sent. del 29/04/21, entre otras).

Es decir, que hay gravamen cuando el decisorio lo perjudica: ello es el presupuesto básico de todo recurso, pues de lo contrario, **si no existe el perjuicio, se diluye toda posibilidad de cuestionar la resolución**. Esto ocurre en el caso, ya que las costas –como he señalado- han sido impuestas en el orden causado.

Ante ese escenario, no cabe sino rechazar la crítica aquí examinada.

8°) Por consiguiente, le propongo a mi distinguido colega: **1)** Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; **2)** declarar desierto –por insuficiencia técnica- el recurso de apelación deducido por la parte demandada (cfr. art. 56 inc. 3° del C.C.A.; y art. 261 del C.P.C.C., por remisión del art. 77 inc. 1° del cuerpo normativo citado en primer término); **3)** confirmar, en consecuencia, la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravio; **4)** imponer las costas de Alzada en el orden causado, en atención al resultado adverso que han obtenido las piezas recursivas articuladas por ambos litigantes (cfr. art. 51, inc. 1°, última parte del C.C.A., t.o. por Ley n° 14.437); y **5)** diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. **ASÍ VOTO.**

El Señor Juez Jorge Augusto Saulquin votó a la cuestión planteada en idéntico sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE: 1°)** Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; **2°)** declarar desierto –por insuficiencia técnica- el recurso de apelación deducido por la parte demandada (cfr. art. 56 inc. 3° del C.C.A.; y art. 261 del C.P.C.C., por remisión del art. 77 inc. 1° del cuerpo normativo citado en primer término); **3°)** confirmar, en consecuencia, la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravio; **4°)** imponer las costas de Alzada en el orden causado, en atención al resultado adverso que han obtenido las piezas recursivas articuladas por ambos litigantes (cfr. art. 51, inc. 1°, última parte del C.C.A., t.o. por Ley n° 14.437); y **5°)** diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

Regístrese, notifíquese a las partes en sus domicilios electrónicos (cfr. Ac. n° 4.039/21 SCBA) y, oportunamente, devuélvanse los autos a la instancia de origen.

Domicilios electrónicos: 20216765568@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR y 27294705142@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----



SAULQUIN Jorge Augusto
JUEZ

BEZZI Ana Maria
JUEZ

BASAIL Martin
AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN

[Volver al expediente](#) [Volver a la búsqueda](#)

[Imprimir ^](#)